APUNTES
MAYO 2023

EDUCACIÓN

1.- Cataluña presiona a los docentes

La lengua es la piedra angular del nacionalismo catalán y, por tanto, una prioridad en los presupuestos del Govern.

Este año 2023, serán 59 millones los que invertirán en promoción del catalán. La Generalitat antepone la lengua a los problemas reales de la educación y presiona a los profesores con cambios continuos y un ataque más en la exigencia en el curso 2025-2026, un curso después de lo que anunció, del nivel C2 de catalán para poder ejercer la docencia.

2.- País Vasco. Absorción de centros concertados

El 25 de abril, el Gobierno vasco aprobó su proyecto de Ley de educación que:

- Hace desaparecer los modelos lingüísticos que permitían a los padres elegir la enseñanza entre tres posibilidades: A (enseñanza en castellano con, al menos una asignatura en euskera), B (asignaturas en ambas lenguas) D (sólo en euskera).
- Obliga a los colegios públicos y privados concertados a que todos los alumnos logren un nivel B2 de euskera y castellano, al finalizar la Educación Secundaria.
- A través de una disposición adicional se dice que los centros integrados podrán integrarse en la red pública.

Todo esto supone abrir la puerta a la progresiva incorporación de centros privados (concertados o no) a la red pública cuando no puedan subsistir con el módulo de concierto y esto es lo que está ocurriendo, porque las Administraciones educativas se están oponiendo a aplicar el coste real de la enseñanza en la concertación.

3.- Los nuevos enemigos de la concertada

En España hay más de 8 millones de alumnos en la enseñanza no universitaria. El 67,3 % va a escuelas públicas, el 25,2 % a los centros privados concertados y el 7,6 % a escuelas privadas. Donde más alumnos estudian en centros privados concertados son el País Vasco (48%), Madrid (29,6 %) y Cataluña (25,9 %).

La escasez de recursos económicos está provocando que algunos colegios concertados tengan que convertirse en públicos, porque escolarizan alumnos vulnerables cuyas familias no pueden colaborar a su sostenimiento. La bajada de la natalidad es otra amenaza sobre todo en las zonas rurales. El índice de natalidad se sitúa en 1,19 hijos por cada mujer, en 2021.

El ataque a la enseñanza privada y concertada desde grupos políticos que está provocando la segregación. La secularización y la falta de influencia social del hecho religioso son una tentación utilizada para paniaguar la identidad de algunos centros.

4.- El ahorro de la Iglesia al Estado

- Cada alumno en la red pública le cuesta al estado 6.441,89 euros al año. En la concertada el coste es de 3.513,32 euros al año por alumno.
- El Estado se ahorra cada año por alumno 2.928,56 euros.
- Los 2.548 centros privados concertados católicos, tienen contratados a 1345.370 trabajadores, de ellos que el m3 % son religiosos y el 97 % laicos.

Es urgente establecer el mismo coste del puesto escolar en la escuela pública y en el privada concertada. Esta medida garantizará la igualdad de oportunidades y afianzará la libertad de enseñanza.

LABORAL

1.- Pensiones

Divergencia en el gasto

La Seguridad Social estima en 2,3 los puntos del PIB de ahorro neto en pensiones, con las medidas de jubilación demorada y la reforma de cuotas de autónomos.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) estima en 0,5 el ahorro máximo a estas medidas, rebajando el optimismo del Gobierno.

Los expertos prevén un 0,16 en puntos porcentuales por los incentivos para demorar la jubilación. Es una décima parte de la estimación el Gobierno, que eleva el ahorro hasta el 1,6 % del PIB.

Deuda en pensiones

10,7 es el porcentaje de aumento interanual del gasto en pensiones. Ofrece casi el triple que el PIB. 26.000 millones de euros de déficit contributivo anual de la Seguridad Social.

2.- Evolución del empleo

- En abril se crearon 238.436 nuevos empleos.
- Cayeron 73.890 parados
- El número total de desempleados se situó en 2.788.370 personas (sin contar los fijos discontinuos)
- Los contratos indefinidos fueron 530.537 y los temporales 626.779.
- De los contratos indefinidos de abril: 224.308 fueron a tiempo completo; 120.914 fueron a tiempo parcial y 185.315 fijos discontinuos.

3.- Preacuerdo salarial hasta 2025

El 5 de mayo, la CEOE, CCOO y UGT llegaron a un principio de acuerdo parea subir los sueldos un 10 % en los próximos 3 años; un 4 % en 2023; un 3 % en 2024 y otro 3 % en 2025. Y, en el caso, de que los precios superen estos incrementos, se incluye una cláusula de revisión anual de hasta el 1 %.

Este acuerdo, a pesar de las afirmaciones de los sindicatos llega tarde, porque los trabajadores con convenio han perdido 5,6 puntos de poder adquisitivo en 2022, año en que los preciso se dispararon hasta el 8,4 %.

Este nuevo acuerdo no es vinculante, no obliga a tomar decisiones de subidas salariales en la misma medida que el acuerdo alcanzado.

Hemos de destacar que estos sindicatos, CCOO y UGT han dado por perdida la batalla de 2022 al ser rechazadas sus propuestas por la patronal, al igual que sus pretensiones de una cláusula que combinase el IPC y los beneficios empresariales.

4.- La Generalitat y los liberados sindicales

En 2016, fueron 32,9 millones de euros los que se destinaron a 2.476 liberados sindicales.

En 2017, fueron 37 millones de euros para 2.299 liberados sindicales.

En 2018, se destinaron 37,6 millones de euros para 2.379 liberados sindicales.

En 2019, fueron 38,6 millones para 2.572 liberados sindicales.

En 2020, se destinaron 40,3 millones para 2.339 liberados sindicales.

En 2021, fueron 41,8 millones para 2.453 liberados.

En 2022, se pagaron 41.043.968 millones de euros a los 2.255 liberados sindicales. Además, en este año 2022 se repartieron otros 1,7 millones de euros para el mantenimiento y distintas actividades sindicales.

Cabe destacar que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña no fiscaliza el dinero público que reciben los sindicatos desde el año 2009.

5.- El absentismo laboral

Ante la escalada del absentismo laboral, las mutuas llevan años pidiendo tener más protagonismo en la lucha contra las ausencias al trabajo.

El coste de las bajas laborales para la Seguridad Social, lejos de moderarse tras la pandemia, se ha consolidado. En 2022 creció un 28 % y para este año se calcula que el Gobierno deberá abonar 11.764 millones para cubrir los procesos de incapacidad temporal.

Más de 1,1 millones de trabajadores faltan cada día a su trabajo.

6.- El empleo y la reforma laboral

El Ministerio de Economía rebaja un 96 % la previsión de nuevos puestos de trabajo por las medidas contra la temporalidad que remitió a Bruselas hace un año.

El Gobierno remitió a Bruselas una simulación de resultados de la reforma laboral esperaba un incremento del 4,8 % de la ocupación y la generación de 960.000 nuevos puestos de trabajo, pero el tijeretazo a esa expectativa implica que esos 960.000 puestos de trabajo que al Gobierno atribuía a esas medidas en 2022, se quedan ahora en 40.000, un 96 % menos.

7.- El Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Hoy apenas llega al 20,8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, a 1.752.467 personas y beneficia a 611.029 hogares.

El subsidio sólo alcanza al 76 % de los beneficiarios previstos por el Gobierno. A más de medio millón de personas y a 240.000 hogares necesitados no estaría llegando el IMV y, mientras esto ocurre, el Ministerio de Seguridad Social deja sin gastar 453 millones de euros del presupuesto del ingreso mínimo.